

# Impacto del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida en zonas de conflicto\*

The Impact of Armed Conflict on Territorial Well-Being and Quality of Life in Conflict Zones

O impacto do conflito armado no bem-estar territorial e na qualidade de vida em zonas de conflito

*Erika Tatiana Ayala García*<sup>a</sup>  
*Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia*  
erikatatianaayala@ufps.edu.co  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7570-6639>

DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.icab>

Recibido: 25 febrero 2025

Aceptado: 27 mayo 2025

Publicado: 09 septiembre 2025

*Yasleidy Pérez García*  
*Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia*  
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2343-146X>

## Resumen:

Este artículo examina el impacto del conflicto armado colombiano en el bienestar territorial y la calidad de vida en las regiones afectadas, empleando una metodología deductiva, sintética y documental. El estudio se centra en comprender cómo el conflicto incide en las múltiples dimensiones del bienestar territorial (económica, física, social y ambiental) y, a su vez, en la calidad de vida de la población (aspectos materiales, salud física y mental, relaciones sociales y entorno). A través de la implementación de matrices de cruce de variables, se facilita la identificación y el análisis detallado de las interrelaciones entre estas dimensiones. La investigación se basa en la revisión de informes de organizaciones internacionales, registros oficiales del gobierno colombiano y diversos estudios académicos especializados. Los principales hallazgos revelan un impacto sistémico del conflicto armado, que se manifiesta en una compleja red de consecuencias negativas que afectan de manera significativa la salud, la cohesión social y las perspectivas de desarrollo económico de las comunidades involucradas.

**Palabras clave:** conflicto armado, bienestar territorial, calidad de vida, impacto, territorio, población.

## Abstract:

This article examines the impact of the Colombian armed conflict on territorial well-being and quality of life in the affected regions, using a deductive, synthetic and documentary methodology. The study focuses on understanding how the conflict affects the multiple dimensions of territorial well-being (economic, physical, social and environmental) and, in turn, the quality of life of the population (material aspects, physical and mental health, social relationships and environment). Through the implementation of cross-variable matrices, the identification and detailed analysis of the interrelationships between these dimensions is facilitated. The research is based on the review of reports from international organizations, official records of the Colombian government and various specialized academic studies. The main findings reveal a systemic impact of the armed conflict, which manifests itself in a complex network of negative consequences that significantly affect the health, social cohesion and economic development prospects of the communities involved.

**Keywords:** Armed Conflict, Territorial Well-Being, Quality of Life, Impact, Territory, Population.

## Resumo:

Este artigo examina o impacto do conflito armado colombiano no bem-estar territorial e na qualidade de vida nas regiões afetadas, utilizando uma metodologia dedutiva, sintética e documental. O estudo centra-se na compreensão de como o conflito afecta as múltiplas dimensões do bem-estar territorial (económico, físico, social e ambiental) e, por sua vez, a qualidade de vida da população (aspectos materiais, saúde física e mental, relações sociais e ambiente). Através da implementação de matrizes de variáveis cruzadas, é facilitada a identificação e análise detalhada das inter-relações entre estas dimensões. A pesquisa baseia-se na revisão de relatórios de organismos internacionais, registros oficiais do governo colombiano e diversos estudos académicos especializados. As principais conclusões revelam um impacto sistémico do conflito armado, que se manifesta numa rede complexa de consequências negativas que afectam significativamente a saúde, a coesão social e as perspectivas de desenvolvimento económico das comunidades envolvidas.

**Palavras-chave:** conflito armado, bem-estar territorial, qualidade de vida, impacto, território, população.

## Notas de autor

<sup>a</sup> Autora de correspondencia. Correo electrónico: erikatatianaayala@ufps.edu.co

## Introducción

Este artículo es un avance de resultados parciales de la investigación titulada *Construcción de paz urbana. La Fortaleza en Cúcuta, territorio afectado por el conflicto armado y la inequidad social en la mujer*, con código 109089 de la convocatoria 948-2024, programa Orquídeas: Mujeres en la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, en una etapa documental. Tiene como objetivo analizar el impacto multifacético derivado del conflicto armado con respecto a la interrelación entre las dimensiones que acompañan los factores de bienestar territorial y calidad de vida en las zonas afectadas.

Su fundamentación teórica se centra en la comprensión del concepto de conflicto armado y en la discusión sobre el bienestar territorial y la calidad de vida en zonas de conflicto. En Colombia, este conflicto se ha extendido por más de seis décadas, generando con ello una compleja interacción entre el Estado, la guerrilla y las fuerzas paramilitares que ha causado daños sociales, económicos, ambientales y físicos tanto para la población como para el territorio, y hechos victimizantes que han afectado la calidad de vida, aumentado la desigualdad y la segregación social-espacial, y potenciando múltiples dificultades asociadas al desarrollo sostenible.

En este sentido, en el presente artículo se aborda la problemática del impacto del conflicto armado en el bienestar territorial en las zonas afectadas, y se analiza cómo las diferentes formas de violencia afectan la calidad de vida de la población y sus percepciones. Para ello se tienen en cuenta las dimensiones propias de cada categoría y se realizan cruces de variables, a través de lo cual se pretende configurar las experiencias vividas de las comunidades.

## Marco teórico

### El conflicto armado en Colombia

El conflicto puede entenderse como una condición propia del ser humano y un fenómeno universal, que surge en diversas etapas de la historia y puede desarrollarse, ya sea a partir de la individualidad y el libre albedrío de las personas, o a través de las manifestaciones de desacuerdo por parte de grupos (Castro, 2018; Illera, 2022). Lo anterior cobra sentido al tener en cuenta que este tipo de procesos parte de un hecho social, en el que existe una disputa entre personas o grupos, caracterizada por ideales e intereses divergentes y por generar dinámicas de exclusión, inestabilidad y lucha, entre otras (Ander-Egg, 1995; Progresar – Fundación para el Desarrollo Social, la Democracia y la Paz, 2000).

Dentro de diversas tipologías, el conflicto armado, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2008), Cañadas *et al.* (2008) y Amnistía Internacional (2024), puede ser comprendido como un enfrentamiento violento, continuo y organizado, protagonizado por grupos armados regulares e irregulares, que trae como consecuencia la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este tipo de conflictos genera efectos significativos tanto en la población como en el territorio, provocando pérdidas de vidas humanas, desplazamientos forzados, actos terroristas, desapariciones forzadas, pérdidas de bienes muebles o inmuebles, confinamiento, secuestro y abandono o despojo de tierras, entre otros hechos victimizantes que afectan el tejido social del territorio y sus comunidades (Registro Único de Víctimas, 2025).

En Colombia, el conflicto armado se ha presentado como un fenómeno prolongado, complejo y violento durante más de sesenta años. Sin embargo, no puede definirse como homogéneo, debido a su naturaleza política y social, que ha generado una compleja interacción entre diversos actores y grupos al margen de la ley (como guerrilla y grupos armados ilegales) y el Estado, dejando como consecuencia profundas desigualdades y crisis sociales, económicas, políticas y territoriales (Ayala *et al.*, 2016).

Su marcada historia beligerante ha promovido dentro del país un proceso de violencia sistematizada, que ha sido definido por autores como Egea y Soledad (2008) en función de su prolongación casi *tradicional* y de baja intensidad, lo que lo diferencia con respecto a otros territorios como Ruanda o Bosnia, caracterizados por conflictos armados concentrados en un corto periodo de tiempo, pero con un alcance de destrucción más intensa.

El conflicto armado interno se ha caracterizado así mayoritariamente por la apropiación y el control de los territorios rurales que presentan grandes potencialidades estratégicas y productivas, dentro de los cuales se destacan zonas del Chocó, los Llanos Orientales, Bolívar, Sucre, Meta, el Putumayo y el Catatumbo (Ibáñez *et al.*, 2006).

Para autores como Ayala *et al.* (2023), desde su génesis en las décadas de 1940 y 1950, el conflicto armado interno se centró en aspectos de violencia política y social, constituidos a partir de una violación sistemática de derechos humanos que incluyen hechos victimizantes como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado de la población civil. Luego del surgimiento de los grupos paramilitares de extrema derecha en la década de 1980, el país sufrió una intensificación de la violencia con una marcada presencia en sus áreas urbanas, a lo cual se sumó el fortalecimiento de las economías ilegales y del narcotráfico como fuente de financiación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Consecuentemente, entre la década de 1990 y el 2015 los efectos de la guerra y el conflicto se agudizaron, con pérdidas considerables e impactos negativos tanto para el territorio como para las personas, de la mano del incremento de hechos victimizantes que incidieron en el tejido social de las comunidades y el desarraigo territorial (Ruiz, 2011). Es importante mencionar que, en este mismo periodo, tuvo lugar el proceso de desmovilización y reincorporación de los grupos paramilitares agrupados bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia, entre los años 2003 y 2006, que si bien redujo la intensidad del conflicto en algunas regiones, también dejó múltiples desafíos en términos de justicia, reparación y garantías de no repetición (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015a).

Posteriormente se inició el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que culminó con la firma del Acuerdo Final en 2016, tras varios años de negociaciones formales. Ese mismo año, en su informe mundial, Human Rights Watch (2016) destacó que entre 1985 y octubre del 2015 alrededor de siete millones de colombianos fueron víctimas del desplazamiento interno en razón del conflicto armado. Igualmente, el CICR (2017) documentó a partir de su acción comunitaria en el país en el año 2015 un total de 812 posibles infracciones al derecho internacional humanitario y otras normas humanitarias, contabilizando alrededor de 19 000 víctimas.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se inició la transformación de la guerrilla en un movimiento político y, en consecuencia, su proceso de entrega de armas con el fin de promover la reintegración de excombatientes y la construcción de una paz sostenible y duradera. No obstante, es importante tener en cuenta que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC no se sumaron al marco de este acuerdo y, por el contrario, intensificaron la confrontación territorial y la violencia a través de prácticas como el reclutamiento forzado, la minería ilegal, el cultivo y procesamiento de coca y los asesinatos selectivos, entre otras (Rincón *et al.*, 2024).

A esto se suma la persistencia del fenómeno del paramilitarismo, que tras el proceso de desmovilización y reincorporación formalizado en la Ley 975 de 2005 (“para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”), ha mutado en una proliferación de bandas criminales emergentes (conocidas como Bacrim) y otras formas de presencia armada ilegal, que continúan operando de manera organizada en distintos territorios del país, disputando el control social, económico y político en aquellas regiones (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

Hacia el año 2021, el gobierno nacional retomó los diálogos con el ELN sin aparente éxito o conclusión; por el contrario, las dinámicas asociadas al conflicto continúan generando repercusiones en las comunidades y el territorio nacional. En este sentido, el periodo comprendido entre el 2022 y el final del 2024 fue un

momento particularmente álgido para las áreas rurales en determinadas regiones del país como el Catatumbo, Nariño y Cauca, en donde el narcotráfico se consolidó como una fuente de ingreso, lo que trajo como consecuencia el incremento de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el homicidio, el secuestro y la extorsión, entre otros, así como la precarización del bienestar y la calidad de vida de la población (González *et al.*, 2025).

## **La importancia del bienestar y la calidad de vida en los territorios**

El concepto de *bienestar territorial* hace referencia a la satisfacción que manifiesta una población, comunidad o sociedad, con respecto al cumplimiento de necesidades materiales o inmateriales como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la infraestructura, la seguridad, la calidad del entorno físico y el acceso a los servicios básicos, entre otras, teniendo en cuenta que tales elementos presentan una incidencia significativa con respecto a la experiencia de vida de las personas y su relación con el entorno que habitan (Cuadra y Florenzano, 2003). El bienestar territorial no solo comprende los aspectos materiales, sino que aborda la percepción subjetiva que tienen las personas sobre su calidad de vida, logrando establecer interrelaciones propias entre las variables que acompañan las dinámicas territoriales y las formas en las que estas inciden en las comunidades locales. A continuación, en la tabla 1 se muestra una lista de dimensiones fundamentales a considerar dentro de la construcción del bienestar territorial.

TABLA 1.  
Dimensiones fundamentales que inciden en el bienestar territorial

<b>Dimensión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Atributo</b>
Económica	Capacidad de una comunidad para generar y acceder a recursos económicos que faciliten una vida digna	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Empleo</li> <li>● Acceso a bienes y servicios</li> <li>● Sostenibilidad económica a largo plazo</li> </ul>
Física construida	Corresponde al entorno físico y la infraestructura que soporta la vida cotidiana en un territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Infraestructura urbana</li> <li>● Vivienda</li> <li>● Espacios públicos y recreativos</li> <li>● Percepción de seguridad</li> </ul>
Social	Relaciones y cohesión dentro de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cohesión social</li> <li>● Participación social</li> <li>● Empoderamiento</li> <li>● Percepción de seguridad</li> </ul>
Medio ambiental	Interacción entre los habitantes y su entorno natural	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Calidad de aire y agua</li> <li>● Acceso a recursos naturales</li> <li>● Resiliencia ante cambios ambientales</li> </ul>

Fuente: elaboración propia a partir de Miguel et al. (2022) y Navarro (2024).

Por otro lado, el concepto de *calidad de vida* se encuentra relacionado a la percepción y satisfacción, tanto material como emocional, que tienen las personas y las comunidades con respecto a las condiciones y el bienestar que experimentan dentro de los entornos que habitan o hacen parte de su cotidianidad. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la calidad de vida no solo está relacionada con la disponibilidad de recursos, sino también con indicadores que van más allá de lo material, como el sentido de pertenencia y de bienestar emocional, derivados de las experiencias frente a las condiciones del entorno (Martínez *et al.*, 2016). En la tabla 2 se referencian las dimensiones que componen la calidad de vida, según la relevancia e interconexión que se presenta entre los individuos, las comunidades y el entorno.

TABLA 2.  
Dimensiones que componen la calidad de vida

<b>Dimensión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Atributo</b>
Vida material	Recursos económicos disponibles y accesos a bienes y servicios  Oportunidades y limitaciones a las que se enfrentan las personas cotidianamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nivel de ingresos</li> <li>● Acceso a servicios</li> <li>● Calidad de la vivienda</li> </ul>
Salud	Bienestar general  Capacidad de las personas para trabajar, socializar y disfrutar de la vida cotidiana	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salud física</li> <li>● Salud mental</li> <li>● Impacto del entorno</li> </ul>
Relaciones sociales	Interacción y relación entre personas  Bienestar emocional y social	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Calidad en intervenciones personales</li> <li>● Sentido de pertenencia</li> <li>● Capital social</li> </ul>
Entorno	Factores externos que afectan la calidad de vida, tales como la seguridad, la calidad del medio ambiente y la integridad cultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seguridad física</li> <li>● Calidad del medio ambiente</li> </ul>

Fuente: elaboración propia a partir de Jiménez y González (2014) y Yáñez y Albacete (2020).

El empleo de la configuración del territorio en el abordaje del bienestar y la calidad de vida posibilita una comprensión integral del mismo, ya que el análisis de estudios que no solo incorporen indicadores económicos, sino que contemplen los índices de satisfacción de necesidades materiales (empleo, vivienda e infraestructura), así como de necesidades inmateriales (salud, educación seguridad y acceso a servicios), fomenta una mirada holística que integra la experiencia subjetiva del ser humano y su relación con el entorno que habita (Bayres, 2022; Navarro, 2024).

Lo anterior favorece además la identificación de las vulnerabilidades y las desigualdades derivadas de las dimensiones física, social, medioambiental y económica del territorio, ya que resulta factible establecer información con respecto a indicadores asociados a la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la cohesión social. Esto determina la posibilidad de establecer estrategias específicas de intervención a corto, mediano y largo plazo, que asociadas a la propuesta y el seguimiento de políticas públicas, puedan generar respuestas efectivas y puntualizadas en pro del bienestar de la comunidad (Ayala *et al.*, 2020).

## Metodología

Este estudio empleó un enfoque metodológico basado en el análisis documental, con el propósito de investigar el impacto del conflicto armado colombiano en el bienestar territorial y la calidad de vida de las poblaciones afectadas (Dávila, 2006). Se adoptó un método deductivo-sintético, partiendo de la revisión de marcos conceptuales y teóricos existentes a través de los cuales se puede obtener una visión generalizada de los fenómenos de estudio y de la interrelación entre el bienestar territorial, la calidad de vida y el conflicto armado colombiano (Sampieri *et al.*, 2006).

Esta base teórica permitió establecer una estructura analítica para la identificación, clasificación y síntesis de información relevante proveniente de diversas fuentes documentales (Gómez, 2012), asumiendo una perspectiva multidimensional que considera las distintas dimensiones del bienestar territorial (económica, física construida, social y ambiental) y de la calidad de vida (material, salud, relaciones sociales y entorno). Estas fuentes incluyen informes de organizaciones internacionales (como el CICR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Human Rights Watch), registros oficiales del gobierno colombiano (especialmente el Registro Único de Víctimas), investigaciones académicas, artículos científicos y estudios de caso.

Siguiendo el marco metodológico de este artículo se desarrollaron matrices para la organización y el cruce de variables que favorecieron un análisis interpretativo (Sampieri *et al.*, 2006) de las dimensiones clave del bienestar territorial y de la calidad de vida, definidas a partir de la literatura especializada.

La construcción de las matrices de doble entrada permitió el análisis de las interrelaciones entre estas dimensiones del bienestar territorial y de la calidad de vida, cruzándolas con el objetivo de identificar cómo los impactos del conflicto armado afectan de manera simultánea y concatenada ambos aspectos. Para cada intersección, se analizó la evidencia documental disponible, buscando establecer relaciones causales o correlativas entre los diferentes impactos (Gómez, 2010).

Este proceso de cruce de variables permitió identificar patrones recurrentes y mecanismos de interacción entre los diferentes factores, revelando la complejidad de las consecuencias del conflicto armado. La interpretación de la información se realizó desde una perspectiva sistémica, reconociendo que los impactos del conflicto no son eventos aislados, sino que forman parte de una red compleja de interrelaciones que se refuerzan mutuamente. Si bien este enfoque metodológico presenta limitaciones inherentes a la disponibilidad y calidad de la información secundaria, su desarrollo permitió obtener una comprensión general y contextualizada de las consecuencias del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida de los colombianos.

## Resultados y discusión

### Bienestar territorial y calidad de vida en zonas de conflicto

La historia de Colombia ha estado marcada en gran parte por las consecuencias y los efectos del conflicto armado en el territorio nacional, teniendo en cuenta que algunas zonas se han configurado como epicentros de violencia. Autores como Ibáñez *et al.* (2006) señalan que los actores responsables de las dinámicas internas de violencia han centrado su actuación en la apropiación estratégica de territorios como el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Chocó, Nariño, Cauca, Sucre, Bolívar, Putumayo y Meta, así como de sus riquezas potenciales, considerando que sus posiciones fronterizas son estratégicas para el tráfico de armamento y cultivos ilícitos, además de que son fuentes potenciales de recursos como el petróleo, la coca y minerales valiosos, entre otros (González, 2001; Murad Rivera, 2003).

En este sentido, el conflicto armado conlleva una destrucción física, pero también una desestructuración o desequilibrio social, económico y ambiental, que a su vez impacta negativamente sobre la calidad de vida de

los habitantes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). En Colombia, el control de los territorios — sobre todo los rurales— y de sus recursos se ha convertido en una apuesta significativa (Aysa-Lastra, 2011), por la cual la población civil ha sido foco de múltiples hechos victimizantes, tales como la desarticulación familiar o el abandono de sus viviendas y sus territorios.

Estas grandes afectaciones que han destruido la infraestructura física en el territorio y socavado el tejido social de la población civil (Bozzoli *et al.*, 2012) conllevan una disminución del bienestar y la calidad de vida en los territorios donde la población civil ha sido víctima sistemática de violación de derechos humanos, de la mano de afectaciones territoriales derivadas de explotación ilegal y cultivos ilícitos.

Para autores como Malguesini y Giménez (2000), una de las razones por las que la población civil se ve obligada a abandonar o huir de su territorio se asocia a la destrucción, sobreexplotación y degradación ambiental que originan los actores armados en sus lugares de origen. Consecuentemente, es importante tener en cuenta que los daños relacionados a las afectaciones del tejido social se ligan también a aspectos de segregación social, ambiental y espacial, fragmentación económica y al aumento en las brechas y desigualdades sociales. La falta o el difícil acceso a la prestación de servicios básicos en los territorios fortalece las vulnerabilidades preexistentes en los mismos, hecho que sumado a ciclos de violencia, pobreza, desigualdad y desarraigo territorial determina la precariedad en la satisfacción de los índices de calidad de vida (Villa e Insuasty, 2016).

Desde esta perspectiva, los estudios de Aysa-Lastra (2011), Carrillo (2010), Machado-Duque y Calderón-Flórez (2014), Mogollón Pérez y Vázquez (2006) y Hernández Bello y Gutiérrez (2008) muestran cómo el aspecto emocional derivado de hechos victimizantes, tanto de los grupos como de los individuos, así como de la pérdida de capital, la fragmentación de las economías familiares y locales, la inseguridad en términos físicos, sociales y alimentarios y otros aspectos asociados al acceso a la justicia, la salud y la educación, ha generado impactos negativos en la población colombiana con respecto a su calidad de vida.

Por su parte, para Calderón (2016), el conflicto armado colombiano tiene una incidencia negativa que afecta el bienestar territorial desde aspectos como el acceso a los servicios básicos, el deterioro de la infraestructura y la percepción de inseguridad. Esto se ve reflejado en dificultades para el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, desde lo cual se contemplan problemáticas asociadas a: la precariedad de recursos, como el empleo informal de las víctimas; las dificultades geográficas, por la distancia física que debe recorrer la persona hasta un equipamiento de salud o educación; las dificultades administrativas, por el proceso burocrático y el desconocimiento del mismo; y las dificultades culturales, por las creencias y valores de las personas en cuanto a diversos aspectos de carácter social, como puede ser la consideración de la medicina tradicional frente a medicamentos convencionales (Carrillo, 2010; Hernández Bello y Gutiérrez, 2008; Mogollón-Pérez y Vázquez, 2008; Prada Gómez *et al.*, 2008; Sánchez Isaza *et al.*, 2016).

En cuanto al acceso de educación, las personas víctimas del conflicto armado no solo se ven expuestas al desarraigo de su territorio, de su identidad, de su vivienda, sino también al de la educación, ya que, dependiendo de las nuevas circunstancias en los lugares o territorios de acogida, muchas veces deben sacrificar temporalmente la escolaridad, mientras adelantan los procesos que implica reestructurar la vida nuevamente en un espacio desconocido (Aysa-Lastra, 2011; Bozzoli *et al.*, 2012; Carrillo, 2010; Hernández Bello y Gutiérrez, 2008; Muggah, 2000).

Los hechos anteriormente mencionados representan pérdidas con respecto al ámbito social, así como en el desarrollo económico-territorial y comunitario, que se ven reflejadas en aspectos como la inversión, el comercio y el turismo, debido a la percepción de inseguridad derivada del conflicto armado. Al respecto, en el informe general *Basta Ya* del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) se evidencia cómo las víctimas del conflicto en Colombia debieron suspender sus actividades económicas y de producción, debido a que los grupos armados instalaron nuevas actividades *propias de la guerra*.

Un caso representativo de esto se dio en el Chocó, en el medio Atrato, donde la población tuvo que cambiar su actividad de pesca y siembra en razón de las nuevas normas de navegación fluvial y tránsito terrestre

impuestas por los actores ilegales. Asimismo, se expone el caso de los campesinos de San Carlos, Antioquia, quienes debieron abandonar el cultivo de sus tierras por la presencia de minas antipersona y las amenazas constantes de los grupos armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). En este sentido, Egea y Soledad (2008) refieren la siembra de minas como una de las problemáticas referente a los territorios y las poblaciones, ya que dificulta la reestructuración de las actividades económicas y productivas de la población civil.

Desde esta perspectiva, autores como Vallejo Bravo (2011) y Barboza Sierra y Guerra Chamorro (2024) señalan la importancia de reseñar cómo la satisfacción del bienestar territorial y la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia se ha visto ampliamente deteriorada con el paso de los años, puesto que la violencia del conflicto armado no solo ha impactado la integridad física de las personas, las infraestructuras y el enfoque de desarrollo territorial, sino que progresivamente ha alterado el tejido social de las comunidades, en las cuales se han perpetuado fenómenos de pobreza, desigualdad, segregación social y espacial y exclusión.

Como señalan Pérez (2021) y Vargas (2021), la persistencia del conflicto armado conlleva serias implicaciones psicosociales, tales como desórdenes mentales, dificultades en las relaciones interpersonales, alteraciones en la percepción del entorno y problemas de adaptación. Según este último autor, la falta de bienestar social se traduce en una reducida integración comunitaria, vulnerabilidad psicológica y deficiencias en aspectos cruciales como la aceptación y la contribución social, la actualización personal y la coherencia en la visión del mundo. Hay que tener en cuenta que las comunidades víctimas de hechos de violencia, desplazamiento e inseguridad han experimentado episodios de ansiedad y estrés que han impactado su salud mental, generando sensaciones de desesperanza y vulnerabilidad (Ayala *et al.*, 2023).

En la tabla 3 se presenta un análisis de la interdependencia entre el bienestar territorial y la calidad de vida en el contexto del conflicto armado colombiano. Su construcción se basa en la identificación de las interrelaciones entre las dimensiones de ambos conceptos, partiendo de un análisis de las consecuencias y de los impactos negativos del conflicto armado en cada una de las dimensiones previamente definidas, incluyendo revisión de la literatura y la incorporación de datos.

Posteriormente, se establecieron las interrelaciones, determinando sus conexiones y consecuencias. El cruce de las dimensiones de bienestar territorial y calidad de vida pretende reflejar la naturaleza sistémica del impacto del conflicto armado, y el hecho de que este no produce efectos aislados, sino una red interconectada de consecuencias que afectan múltiples aspectos de la vida social y territorial. El desarrollo del cruce de variables aquí expuesto permite identificar las posibles interrelaciones causales, determinando cómo los impactos influyen en diferentes ámbitos de manera simultánea.

TABLA 3.  
Cruce de variables entre las dimensiones de bienestar territorial y calidad de vida

Factor	Dimensión	Impacto conflicto armado
Calidad de vida	Material	<p>La destrucción de la infraestructura productiva y la inseguridad generalizada reducen significativamente el acceso a bienes y servicios, limitando las oportunidades económicas.</p> <p>En Colombia el hecho victimizante con más víctimas es el desplazamiento forzado, una de cuyas principales consecuencias es el abandono de los bienes y materiales por la destrucción física de los mismos y por la amenaza directa a la integridad física y la seguridad de la población civil (Carrillo, 2010; Mogollón-Pérez y Vázquez, 2008).</p> <p>El desplazamiento forzado representa destierro y daños económicos, de bienes, lugares y relaciones sociales; así mismo, se caracteriza por la precariedad socioeconómica, la exclusión, la estigmatización, el hacinamiento, la dificultad de acceder a los servicios públicos y la salud, la incertidumbre y la angustia a la que se ve expuesta la población civil en los espacios intraurbanos de acogida (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Carrillo, 2010; Dueñas <i>et al.</i>, 2014; Hayes-Conroy y Sweet, 2014; Hernández Bello y Gutiérrez, 2008; Mogollón-Pérez y Vázquez, 2008).</p> <p>Según el Registro Único de Víctimas (corte 30/04/2025), en Colombia son 135 276 las personas que han sufrido el hecho victimizante de la pérdida de</p>

	<p>bienes muebles e inmuebles, y 45 373 han sido despojadas forzosamente de sus tierras.</p> <p>Este impacto coincide directamente con la dimensión económica del bienestar territorial, creando un círculo vicioso de pobreza. La calidad de la vivienda disminuye, como ya se discutió, afectando la salud física y mental de los habitantes.</p>
Salud física y mental	<p>El acceso limitado a los servicios de salud, la exposición a la violencia y las secuelas psicológicas del desplazamiento y la pérdida generan impactos negativos en el bienestar general.</p> <p>De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (2017), el fenómeno del conflicto armado incide en la salud mental de las víctimas, dejando huellas psicosociales como recuerdos postraumáticos, aislamiento social, dolor por las pérdidas, paranoia, afecciones psicosomáticas, trastornos mentales, sentimientos de culpa, rabia, entre otras. La gravedad de la afectación depende de factores como la intensidad y el tipo de hecho victimizante, o de si la persona fue víctima directa o indirecta.</p> <p>Lo anterior también lo refiere el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), señalando que las víctimas del conflicto armado adquieren conductas nuevas de vivencia basadas en la prevención y protección, es decir, evitan salir de sus hogares, hablar con desconocidos, tienen comportamientos de</p>

		<p>hipervigilancia, tensión emocional, nervios, entre otros.</p> <p>Según el Registro Único de Víctimas (corte 30/04/2025), en Colombia hay 9 943 287 víctimas reconocidas, de las cuales se identifican 15 430 por lesiones personales psicológicas.</p> <p>Por otra parte, el acceso a la salud también se ve afectado en contexto de conflicto armado, puesto que los actores armados consideran una estrategia el ataque a los servicios de salud (Instituto Nacional de Salud, 2017). El personal médico es víctima de amenazas, secuestros, asesinatos, torturas, el equipamiento de salud es destruido, se presentan ataques al transporte y las unidades sanitarias, la entrega de suministros es bloqueada, así como también la prestación de los servicios de la salud a los grupos enemigos, y existe restricción de las actividades de promoción y prevención de la salud (Instituto Nacional de Salud, 2017; Ministerio de Salud y Protección Social, 2012; Pedersen, 2002).</p> <p>En este sentido, es importante reseñar que el impacto del entorno degradado —relacionado con la dimensión ambiental del bienestar territorial— exacerba aún más los problemas de salud.</p>
	<p>Relaciones sociales</p>	<p>La violencia, el desplazamiento y la incertidumbre erosionan la confianza y la cohesión social, dificultando la interacción positiva entre personas. El Ministerio de Salud y Protección (2017) reconoció que, en el marco del conflicto armado en Colombia,</p>

	<p>la población civil ha sido víctima de daños psicosociales a nivel individual, familiar y comunitario. En el nivel comunitario la violencia ha debilitado las relaciones sociales, los vínculos y las redes de apoyo, deteriorando el tejido social de las comunidades. El Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) referenció a los actores armados como los responsables de fracturar el tejido social, porque ellos llegan a los territorios instaurando lógicas de distanciamiento, miedo, desconfianza, división y aislamiento social, a través de los hechos victimizantes que perpetúan en los espacios.</p> <p>En el país, la Ley 1448 de 2011, actualmente modificada con la Ley 2421 de 2024, estableció la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI), el cual brinda atención a nivel individual, familiar y comunitario. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448, en el año 2022 se brindó atención psicosocial a 1493 víctimas del conflicto armado (Procuraduría General de la Nación, 2024).</p>
Entorno	<p>La inseguridad física, la degradación ambiental y el impacto negativo en la integridad cultural son consecuencias directas del conflicto.</p> <p>Todo esto contribuye a una disminución de la calidad de vida, afectando profundamente la experiencia subjetiva de los habitantes en zonas de conflicto.</p>

<p>Bienestar territorial</p>	<p>Económica</p>	<p>El conflicto genera una reducción drástica en el acceso a bienes y servicios. La falta de empleo, la destrucción de infraestructuras productivas y la inseguridad generalizada impiden la generación de ingresos, conduciendo a la pobreza y la falta de sostenibilidad económica a largo plazo.</p> <p>Según Procuraduría General de la Nación (2024), las víctimas ocupadas-independientes en el año 2024, con corte a 30 de abril, fueron 2033. La tasa de ocupación para el mismo corte correspondió al 0,2 %; las mujeres con un 42 %, los hombres con el 58 % y los discapacitados con el 7,08 %. Por otra parte, en el 2023 únicamente 1 811 429 víctimas contaron con un trabajo formal o con una ocupación independiente formal.</p> <p>En el mes de mayo del 2024, las 6 266 854 víctimas del conflicto armado se caracterizaron en el Sisben IV, la mayoría en el grupo A - Pobreza extrema, con un total de 2 705 837 registrados; en el grupo B - Pobreza moderada, se registraron 2 220 460 personas, en el grupo C – Vulnerables, 1 077 293, y en el D - No pobre, no vulnerable, 63 264 víctimas (Procuraduría General de la Nación, 2024).</p>
	<p>Física construida</p>	<p>La falta de inversión pública y privada se refleja en la degradación de la infraestructura urbana, la precariedad de la vivienda y la carencia de espacios públicos adecuados.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación (2024) refiere que el déficit habitacional en 2023 se ubicó en 28,9 %,</p>

	<p>cifra que representa una disminución del 1,5 % con respecto a 2022. Del déficit total, el 6,8 % corresponde a los hogares que necesitan una nueva vivienda para su alojamiento, y el 22,1 % identifica los hogares que habitan en viviendas susceptibles a ser mejoradas. Por otro lado, el déficit habitacional urbano es de 19,6 % y el rural del 62,1 %.</p> <p>La falta de recursos para la vivienda y la infraestructura básica impacta directamente la calidad de vida, tal como se aprecia en la dimensión material, que se ve afectada tanto por la falta de ingresos como por la calidad de la vivienda.</p>
Social	<p>El desplazamiento forzado, la violencia y el miedo generan una desconfianza generalizada que debilita la cohesión social y reduce la participación ciudadana. Las consecuencias negativas sobre el sentido de pertenencia, la percepción de seguridad y la calidad de las relaciones sociales afectan significativamente el bienestar emocional y la salud mental de las personas.</p> <p>Teniendo presentes las afectaciones psicosociales reconocidas por el Ministerio de Salud y Protección (2017) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) en torno a la calidad de vida, el Instituto Nacional de Salud (2017) reconoció que el conflicto armado colombiano ha lesionado y alterado las relaciones sociales, los vínculos, la cultura, las creencias, los valores, las prácticas y el tejido social de las comunidades afectadas. Además, enfatizó que</p>

		<p>el aislamiento social y la débil participación ciudadana son producto de las amenazas y los ataques perpetrados por los actores armados en los espacios públicos donde se reúne la comunidad para celebrar, compartir, conmemorar y realizar actividades socioculturales, generando destrucción, pérdida de arraigo y daños psicosociales en los vínculos comunitarios (Taborda, 1999).</p> <p>Según el Registro Único de Víctimas (s.f.), algunas de las zonas que se constituyen sujetos de reparación colectiva en Colombia son: Caribe, Chocó, Antioquia, Córdoba y Urabá, Eje Cafetero, Suroccidente y la zona Centro, que incluye los casos, territorios y espacios de Norte de Santander. Se entiende por sujetos de reparación colectiva a aquellas comunidades campesinas y barriales, organizaciones, movimientos sociales y pueblos étnicos que han sido violentados colectivamente por las consecuencias del conflicto armado.</p> <p>Por otra parte, el desplazamiento forzado es uno de los hechos victimizantes más frecuentes en Colombia y el que más altera la vida de las víctimas, puesto que no solo se enfrentan al desarraigo de su territorio, sino también a la pérdida de relaciones sociales, vínculos, y redes de apoyo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Según el Registro Único de Víctimas (corte 30/04/2025), en Colombia se registran 9 943 287 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8 861 715 son por desplazamiento forzado.</p>
--	--	--

	Ambiental	<p>La explotación ilegal de recursos naturales, asociada con la violencia, causa una degradación ambiental que afecta la calidad del aire y del agua y reduce el acceso a recursos naturales. En el contexto del conflicto armado, las diferentes modalidades de obtención de recursos para la guerra empleadas por los actores armados tienen efectos directos en el medioambiente y en la salud, ya que algunas de estas implican la contaminación de recursos naturales por el derrame de hidrocarburos, la erosión de tierras, la pérdida de especies y flora por la minería y los cultivos ilegales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Instituto Nacional de Salud, 2017; Ugalde <i>et al.</i>, 1999). Por ejemplo, en el 2014, específicamente el 1 de julio, la Defensoría del Pueblo reportó un derrame de petróleo causado por las FARC en el Putumayo, situación que afectó alrededor de 343 personas. Otro caso similar sucedió en septiembre del 2024 en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, también atacado por los grupos armados, donde no solo se vieron afectadas las aguas del río Margua, sino también las infraestructuras, la población civil y la producción agrícola (Gómez, 2024).</p> <p>Por otra parte, las medidas contra las acciones ilegales de los grupos armados también tienen repercusiones en la salud y en el medio ambiente; por ejemplo, las fumigaciones de glifosato sobre los cultivos ilícitos potencian enfermedades respiratorias, de la piel y anomalías en los procesos de gestación-embarazo (Instituto Nacional de Salud, 2017).</p>
--	-----------	---

		<p>La Defensoría del Pueblo (2015) reporta en una noticia los evidentes daños a la salud y al medio ambiente que deja la fumigación de glifosato, los cuales incluyen afecciones digestivas, de la piel y respiratorias, así como también la contaminación de suelos, la muerte de especies, la intoxicación de la población, el desplazamiento de la población a otros territorios y la pérdida de producción agrícola. De acuerdo a ello, en el mismo año de 2015 el Ministerio de Salud y Protección solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes retirar las fumigaciones a los cultivos.</p> <p>El impacto del entorno degradado en la salud física y mental de la población afecta significativamente la calidad de vida.</p>
--	--	--

Fuente: elaboración propia.

A partir de la tabla 3 se puede evidenciar cómo el conflicto armado en Colombia ha generado un tejido interconectado de impactos negativos que afectan de manera simultánea y recurrente las dimensiones propias de la calidad de vida y el bienestar territorial, intensificando la vulnerabilidad social, la pobreza, la violencia y la inseguridad.

Se destaca que la dimensión material de la calidad de vida presenta afectaciones asociadas a la destrucción de infraestructura y la inseguridad generalizada en razón del conflicto armado, lo cual impacta directamente a la dimensión económica del bienestar territorial, toda vez que en este contexto se limita el acceso a los bienes y servicios básicos, reduciendo las oportunidades de desarrollo tanto para las comunidades como para el territorio, hecho que se ve reflejado en un incremento en el índice de pobreza y en la incapacidad de sostenimiento productivo territorial. Como se evidencia en la tabla 3, este impacto económico también incide negativamente en la dimensión física construida, ya que la falta de recursos en los territorios y en las comunidades limita la posibilidad de suplir el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas, así como de la infraestructura, prolongando la vulnerabilidad material.

Sin embargo, tal y como se menciona en el *Informe nacional de desplazamiento forzado* (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015b), es relevante tener en cuenta que la violencia y el temor generados por el conflicto armado no solo impactan negativamente la dimensión material, sino que consecuentemente se reflejan y afectan la dimensión social del bienestar territorial y la calidad de vida.

En ese sentido, hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el homicidio y el secuestro, entre otros, son determinantes en el debilitamiento de la cohesión y el tejido social.

Las comunidades que se enfrentan a la violación sistemática de derechos humanos presentan una pérdida del sentido de pertenencia, de lugar, y un profundo deterioro de las relaciones sociales. Esto trae consecuencias en la salud mental y genera impactos negativos en la salud física, una de las dimensiones fundamental para la calidad de vida, cuya afectación también se incrementa en razón del deterioro ambiental y a causa de la percepción de inseguridad (Instituto Nacional de Salud, 2018).

Al respecto, es posible evidenciar el impacto negativo que presenta la dimensión ambiental del bienestar territorial, algo directamente relacionado con la violencia y la falta de control estatal. En el territorio, esto es evidente a través de la explotación ilegal e informal de recursos naturales que afecta consecuentemente la calidad del aire y el agua, trayendo consecuencias negativas a la salud física y mental de la población e

impactando su calidad de vida. Sumado a ello, la degradación ambiental y la inseguridad física generan un impacto negativo en la percepción que tienen las comunidades sobre su entorno y su sostenibilidad.

En la tabla 4 se presentan las interrelaciones entre el bienestar territorial y la calidad de vida en zonas afectadas por el conflicto armado colombiano, con el fin de comprender su impacto en el territorio y en las poblaciones en el territorio nacional. Su construcción se fundamentó en la utilización de una metodología de corte documental, deductiva y sintética, como se indicó previamente.

Las relaciones presentadas en la tabla 4 no fueron asumidas directamente como *dadas* por las fuentes, sino que fueron interpretadas a partir de un cruce analítico de variables, con base en un marco teórico previamente definido (Tablas 1 y 2). Se identificaron y definieron las dimensiones clave del bienestar territorial y la calidad de vida (económica, física construida, social, medioambiental, material; salud física y mental, relaciones sociales, entorno) a partir de la interpretación y lectura de la literatura especializada de documentos oficiales, estudios de caso, informes institucionales y literatura científica —muchos de los cuales abordan por separado los impactos del conflicto armado, el bienestar territorial o la calidad de vida—, y se articularon desde una visión sistémica e interpretativa del conflicto como fenómeno transversal que asume los elementos recurrentes y más relevantes en los diferentes enfoques teóricos.

Esto implicó la sistematización de las dimensiones claves a partir de autores como Miguel *et al.* (2022), Navarro (2024), Jiménez y González (2014) y Yáñez y Albacete (2020), entre otros. Los impactos del conflicto armado en cada dimensión fueron extraídos de fuentes primarias como el Registro Único de Víctimas, el Instituto Nacional de Salud, e informes de la Procuraduría, el CICR y Human Rights Watch.

El establecimiento de relaciones entre dimensiones se llevó a cabo a través de patrones de impacto coincidente o encadenado (por ejemplo: destrucción de infraestructura productiva-pérdida de empleo-disminución de ingresos-deterioro en salud y alimentación). Este análisis generó relaciones causales, a partir de evidencia documental, que mostraba un vínculo directo para la identificación de mecanismos a través de los cuales el conflicto afectaba la interrelación de las dimensiones, y relaciones correlativas, cuando el vínculo era concurrente. Para ello se identificaron asociaciones o patrones en la literatura, asumiendo que, si bien no se podía probar una causalidad directa, la síntesis de estos hallazgos sugería una relación significativa.

Se destaca aquí que el cruce de variables presentado en la tabla 4 es un ejercicio de interpretación original, sustentado en la metodología sintética, ya que las fuentes documentales no presentan explícitamente estas interrelaciones aquí planteadas. En ese sentido, este artículo, desarrollado como un avance del proyecto a partir de resultados parciales de la investigación en una etapa documental, propone una lectura interdimensional del impacto del conflicto, que articula datos dispersos para dar cuenta de su carácter sistémico.

El proceso de cruce de variables se llevó a cabo mediante un análisis interpretativo derivado de la evidencia documental disponible para cada celda de la matriz. Este correspondió a la interpretación de la información, así como a la búsqueda de patrones, conexiones y mecanismos de interacción entre los diferentes impactos del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida. El cruce fue desarrollado mediante una matriz de doble entrada, donde las filas representan las dimensiones del BT y las columnas las dimensiones de CV. Cada fila se relacionó con una o varias columnas a partir de aspectos como la evidencia de impacto recurrente y documentado, la coincidencia temática en los factores estructurales afectados, y la lógica territorial y poblacional común en el análisis.

Posteriormente, se establecieron vínculos en función de los siguientes clasificadores: ¿cómo ocurre?, que describe, desde la interpretación y la evidencia, el mecanismo de interacción entre dimensiones y la influencia del conflicto; ¿por qué ocurre?, que explica la causalidad desde el análisis de los datos en el contexto territorial colombiano; e impacto en el territorio o la población, que identifica el efecto en la población o el territorio resultante del cruce de las variables.

Es importante tener en cuenta que las interrelaciones producto de este cruce de variables no solo suministran una comprensión referente a los impactos negativos del conflicto, sino que establecen

información base e insumos para la comprensión y futuro desarrollo de intervenciones más específicas y contextualizadas en el territorio nacional. A partir de ello, desde un enfoque territorial se pueden evidenciar los impactos derivados del conflicto armado asociados a la infraestructura, los recursos naturales y el desarrollo económico y social del territorio, y desde un enfoque poblacional, los impactos asociados a la salud (física y mental), la seguridad, las relaciones sociales, el acceso a servicios básicos, las condiciones de vida y el desarrollo humano.

TABLA 4.

Interrelaciones entre el bienestar territorial (BT) y la calidad de vida (CV) en zonas de conflicto armado

<b>Dimensiones cruzadas</b>	<b>¿Cómo ocurre?</b>	<b>¿Por qué ocurre?</b>	<b>Impacto en el territorio o la población</b>
Económica (BT) y material (CV)	La destrucción de la infraestructura (económica) condiciona el acceso a bienes y servicios, reduciendo las oportunidades de desarrollo. Esto genera un impacto en el acceso a recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas (dimensión material) como vivienda, alimentación y salud.	El conflicto genera inestabilidad, violencia y percepción de inseguridad, afectando la inversión y la producción. La destrucción física de infraestructura y el desplazamiento forzado limitan las posibilidades de generación de ingresos.	Incremento de pobreza, con limitadas oportunidades para mejorar la calidad de vida material y un impacto en el desarrollo económico del territorio.
Física construida (BT) y material (CV)	La falta de inversión pública y privada en infraestructura (física construida) de vivienda y servicios básicos, a causa del conflicto armado, genera un déficit habitacional y reduce la calidad de las	El conflicto armado genera inseguridad, desincentivando la inversión. Los recursos destinados a la reconstrucción suelen ser limitados o mal administrados. Los desplazamientos también generan	El incremento de la vulnerabilidad material de la población, el aumento de asentamientos informales y el deterioro tanto de la salud pública como de la

	viviendas existentes, impactando directamente el acceso a una vivienda digna (material).	demanda en zonas con infraestructura deficiente.	cohesión social impactan negativamente el desarrollo urbano.
Social (BT) y relaciones sociales (CV)	La violencia y el desplazamiento forzado impactan la dimensión social, erosionando la confianza, la cohesión y las relaciones sociales, deteriorando el sentido de pertenencia, la interacción social, y la capacidad de las personas de disfrutar de relaciones sociales positivas.	El conflicto genera miedo e incertidumbre, afectando la dinámica social. El desplazamiento produce desarraigo y la fragmentación de las redes sociales. La violencia provoca trauma y pérdida de confianza en las instituciones.	Se debilita el tejido social, se incrementa la vulnerabilidad de las comunidades, y se dificultan los procesos de reconstrucción y desarrollo social.
Medioambiental (BT) y salud física y mental (CV)	La degradación medioambiental generada por la explotación ilegal de recursos naturales o el conflicto armado afecta la calidad del aire y el agua.  La violencia y el trauma psicológico	La falta de control estatal en zonas de conflicto facilita actividades ilegales con alto impacto ambiental.  El trauma derivado de la violencia causa estrés y afectaciones psicológicas, mientras	Deterioro de la calidad de vida, incremento de la morbilidad y mortalidad, afectación a la salud pública.  Esto tiene consecuencias económicas y

	asociados al conflicto impactan directamente la salud física y mental de la población.	se reduce el acceso a servicios de salud.	sociales de gran impacto.
Económica (BT) y salud física y mental (CV)	La destrucción de la infraestructura productiva y la inseguridad (dimensión económica) limitan las oportunidades económicas, generando pobreza y reduciendo el acceso a la salud, incluyendo servicios de salud física y mental.	La violencia y la falta de oportunidades impiden a las personas acceder a trabajos dignos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.	Aumenta la vulnerabilidad de la población ante enfermedades, tanto físicas como mentales, debido a la falta de acceso a los recursos necesarios para su atención.

Fuente: elaboración propia.

## Conclusiones

El desarrollo del estudio sobre el impacto del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida en Colombia expone una realidad social y territorial que requiere una planificación y atención integral y multisectorial. Como se ha podido evidenciar, a lo largo de los años de conflicto el territorio nacional y sus comunidades han estado expuestos a una destrucción física y una desestructuración social, económica y ambiental que ha incidido negativamente en la calidad de vida de la población.

Desde este punto de vista, el conflicto armado ha propiciado procesos de desigualdad y vulnerabilidad tanto material como social, que han incrementado las brechas y la segregación urbana y social. La prestación de servicios básicos, la inseguridad alimentaria en zonas de conflicto, la precariedad y el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda han propiciado un círculo de pobreza que limita el desarrollo de las comunidades y de los territorios.

Sumado a lo anterior, la violencia armada, representada a través de múltiples hechos victimizantes, y en algunos casos revictimizantes, ha fragmentado el tejido y la cohesión social, ya que aspectos como el homicidio, el desplazamiento forzado, el secuestro, la violencia sexual y las pérdidas económicas, entre otros, limitan las capacidades de las poblaciones para reorganizarse y afrontar colectivamente nuevos desafíos.

Lo anterior cobra relevancia al tener en cuenta que las consecuencias e impactos psicosociales de los conflictos conllevan traumas, episodios de ansiedad, depresión y estrés postraumático que constantemente afectan la salud mental de las comunidades y el desarrollo de su vida social y económica. A partir de esta investigación, se ha podido evidenciar que con respecto a la calidad de vida y el bienestar territorial el conflicto armado colombiano ha propiciado una destrucción o desmejoramiento económico significativo, lo cual se ha visto reflejado en la baja productividad, el mínimo o nulo acceso a oportunidades laborales o de mejoramiento de calidad de vida y la dificultad de establecer escenarios propicios para la inversión en los territorios catalogados como zonas vulnerables o de conflicto permanente, impidiendo así un desarrollo territorial sostenible.

Otro elemento que vale la pena resaltar con respecto a los impactos corresponde a la degradación ambiental y la pérdida de recursos debido a la explotación informal e ilegal de los recursos naturales, hecho que afecta considerablemente la calidad del agua, la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades, además de que genera un impacto directo en la salud, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria de las mismas. Sin embargo, este aspecto exhibe una condición paradójica en Colombia, donde la riqueza natural y la biodiversidad, que deberían ser fuentes de bienestar y desarrollo, se convierten en detonantes y también víctimas del conflicto.

Los territorios ricos en recursos naturales a menudo son escenario de disputas entre actores armados por el control de la tierra y la explotación de estos recursos, generando una presión constante sobre el medio ambiente y las comunidades que dependen de él. Esta situación requiere una reflexión profunda sobre cómo transformar la riqueza natural en un factor de paz y desarrollo sostenible, promoviendo una gestión responsable y equitativa de los recursos, fortaleciendo la gobernanza ambiental y garantizando la participación de las comunidades en la toma de decisiones, con el fin de romper el ciclo de violencia y degradación que afecta a estos territorios.

Asimismo, es importante enfatizar que a lo largo del desarrollo del conflicto armado en Colombia se ha evidenciado la debilidad institucional y de presencia efectiva por parte del Estado en las zonas más afectadas, hecho que ha incidido en la perpetuación de violencia y en una desigualdad urbano-social, lo que demuestra la necesidad de generar planes, procesos, estrategias y/o proyectos multisectoriales de corto, largo y mediano plazo que aborden las complejidades del conflicto. Esto implica no solo incluir aspectos de seguridad, sino contemplar de manera integral el fortalecimiento de las instituciones, la reparación integral de las víctimas, la promoción del desarrollo económico inclusivo, la protección y mejora del medio ambiente y la atención y acompañamiento integral de la salud física y mental de las comunidades, con el fin de promover territorios más equitativos y resilientes.

Consecuentemente, como se pudo apreciar en el texto, este impacto del conflicto armado en Colombia ha generado un sistema interconectado de consecuencias negativas que se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso de vulnerabilidad y pobreza que obstaculiza el desarrollo sostenible de los territorios. A partir del análisis de las interrelaciones entre bienestar territorial y calidad de vida se evidenció un impacto sistémico generado por interrelaciones clave, lo cual revela una realidad compleja que trasciende la destrucción física y alcanza los ámbitos de orden social, económico, ambiental y de salud.

Esta conclusión no es una simple afirmación, sino el resultado de un análisis minucioso de las relaciones entre las dimensiones determinadas, a partir de lo cual se identificó que el conflicto no solo causa daños directos (como la destrucción de infraestructura), sino que también genera efectos indirectos que se propagan a través de diferentes ámbitos (como la disminución de oportunidades económicas, el deterioro de la salud mental, la erosión del tejido social y la degradación ambiental).

Estos efectos, a su vez, se refuerzan mutuamente, creando ciclos que perpetúan la pobreza y la vulnerabilidad de las comunidades. Por ejemplo, la destrucción de la infraestructura productiva limita el acceso a bienes y servicios, lo que a su vez afecta la salud y la alimentación de las personas, disminuyendo su capacidad de generar ingresos y perpetuando su situación de pobreza. Este tipo de interrelaciones complejas, evidenciadas a lo largo del artículo y sintetizadas en la tabla 4, permite afirmar que el impacto del conflicto armado en el país es sistémico y trasciende la simple suma de daños individuales.

Finalmente, se resalta que el estudio del bienestar territorial y la calidad de vida en contextos de conflicto armado, como el colombiano, favorece el reconocimiento real e integral de su impacto, proporcionando información relevante para el diseño e implementación de intervenciones efectivas. Esto es crucial, dado que cada territorio afectado presenta particularidades propias, tanto en su entorno físico como en las características socioculturales de sus comunidades. La diversidad de experiencias, determinada por la intensidad del conflicto, la presencia de diferentes grupos armados, la historia local y las estrategias de

adaptación comunitarias, exige un análisis específico y contextualizado para evitar la aplicación de soluciones genéricas que podrían resultar ineficaces o incluso contraproducentes.

Abordar la complejidad del impacto del conflicto armado demanda un enfoque metodológico que reconozca la heterogeneidad territorial y la importancia de la participación comunitaria en la definición y la implementación de las estrategias. La información obtenida a través de la evaluación del bienestar territorial y la calidad de vida sirve como herramienta para comprender las necesidades específicas de cada comunidad y diseñar intervenciones que se ajusten a su realidad. Solo a través de este enfoque contextualizado y participativo se podrán construir políticas públicas y programas de desarrollo sostenible que promuevan la reparación de las víctimas, la reconstrucción social y el fortalecimiento de la resiliencia en los territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, la investigación exhaustiva del bienestar y la calidad de vida en cada zona es indispensable para la construcción de una paz duradera y equitativa.

## Referencias

- Amnistía Internacional. (2024, 31 de octubre). *¿Qué es un conflicto armado?* <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-es-un-conflicto-armado/>
- Ander-Egg, E. (1995). *Diccionario del trabajo social*. Lumen.
- Ayala, E. T., Rodríguez, R. D. y Osorio, E. G. (2016). Arquitectura y arte como medios para construir y fortalecer la Colombia del postacuerdo. *Dearq*, 1(18), 46-55. <https://doi.org/10.18389/dearq18.2016.04>
- Ayala, E. T., Hernández, C. A., y Ayala, R. (2020). El papel de la arquitectura ante los problemas de calidad de vida de la población víctima del conflicto armado colombiano. *Encuentros*, 18(01). <https://doi.org/10.15665/encuent.v18i01.2156>
- Ayala, R., Coronel, L. K. y Ayala, E. T. (2023). Costos, daños y consecuencias del conflicto armado en Colombia desde una mirada territorial y comunitaria. *Módulo Arquitectura CUC*, 31, 93-110. <https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/4776/5187>
- Aysa-Lastra, M. (2011). Integration of internally displaced persons in urban labour markets: A case study of the IDP population in Soacha, Colombia. *Journal of Refugee Studies*, 24(2), 277-303. <http://dx.doi.org/10.1093/jrs/feq054>
- Barboza Sierra, S. P y Guerra Chamorro, S. (2024). *Nivel de bienestar social en las víctimas del conflicto armado en el municipio de Chalán* [Tesis de pregrado]. Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. <https://repositorio.cecar.edu.co/server/api/core/bitstreams/f47925ba-ecd0-4529-a1ff-a542bda02883/content>
- Bayres, K. (2022). *Resultados de Encuesta de Calidad de Vida y Bienestar Subjetivo* [Documento de Trabajo N°282]. Rimisp.
- Bozzoli, C., Bruck, T., y Wald, N. (2012). Self-employment and Conflict in Colombia. *Journal of Conflict Resolution*, 57(1), 117-142. <http://dx.doi.org/10.1177/0022002712464849>
- Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Latinoamérica. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, (62), 227-257.
- Cañadas, M., Caramés, A., Fisas, V., García, P., Mendiola, M., Prandi, M., Redondo, G., Royo, J. M., Sanz, E., Tomàs, N., Urgell, J., Vilellas, A. y Vilellas, M. (2008). *Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Icaria Editorial / Escola Cultura de Pau, UAB.
- Carrillo, A. C. (2010). Internal displacement in Colombia: Humanitarian, economic and social consequences in urban settings and current challenges. *International Review of the Red Cross*, 91(875), 527. <http://dx.doi.org/10.1017/S1816383109990427>
- Castro, F. (2018). Conflicto como motor de cambio y su impacto en la cultura de paz. *Eirene Estudios de Paz y Conflictos*, (1). <https://portal.amelica.org/ameli/journal/183/183765006/html/>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. CNMH. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/1.-Basta-ya-2021-baja.pdf>

- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015a). *Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC*. CNMH. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/desmovilizacionDesarmeReintegracion/desmovilizacion-y-reintegracion-paramilitar.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015b). *Informe nacional de desplazamiento forzado. Una nación desplazada*. CNMH. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). *Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia*. CNMH. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/hasta-encontrarlos/hasta-encontrarlos-drama-de-la-desaparicion-forzada-en-colombia.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *Hacia el fin del conflicto: experiencias de desarme, desmovilización y paso de excombatientes a la vida civil en Colombia*. CNMH. <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/hacia-el-fin-del-conflicto.pdf>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (2008). *¿Cuál es la definición de “conflicto armado” según el derecho internacional humanitario?* CICR. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/es/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (2017). *Colombia: retos humanitarios 2016*. CICR. <https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-y-retos-humanitarios-de-2016>
- Congreso de la República. (2011). Ley 1448/2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043>
- Cuadra, H. y Florenzano, R. (2003). El bienestar subjetivo: hacia una psicología positiva. *Revista de Psicología*, 12(1), 83-96. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2003.17380>
- Dávila, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 12(Ext), 180-205.
- Defensoría del Pueblo. (2014). *Derrame de petróleo de las Farc en Putumayo afecta a unas 106 familias: Defensoría*. <https://www.defensoria.gov.co/en/-/derrame-de-petr%C3%B3leo-de-las-farc-en-putumayo-afecta-a-unas-106-familias-defensor%C3%ADa>
- Defensoría del Pueblo. (2015, abril 29). Testimonios que dan cuenta de los efectos del glifosato. *Sala de Prensa*. <https://www.defensoria.gov.co/en/-/testimonios-que-dan-cuenta-de-los-efectos-del-glifosato>
- Dueñas, X., Palacios, P., & Zuluaga, B. (2014). Forced displacement in Colombia: What determines expulsion and reception in municipalities? *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 20(4), 585-597. <http://dx.doi.org/10.1515/peps-2014-0037>
- Egea, C. y Soledad, J. I. (2008). Migraciones y conflictos: El desplazamiento interno en Colombia. *Convergencia*, 15(47), 207-235.
- Gómez, L. (2010). Un espacio para la investigación documental. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica*, 1(2), 226-233.
- Gómez, L. (2024). *Atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas dejó en emergencia ambiental a Norte de Santander: Comunidades están en riesgo*. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2024/09/26/atentado-contra-el-oleoducto-cano-limon-covenas-dejo-en-emergencia-ambiental-a-norte-de-santander-comunidades-estan-riesgo/>
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Red Tercer Milenio.
- González, C., Jiménez, G. y Majbub, S. (2025). Transformación territorial y reconfiguración del conflicto: retos y propuestas para el Catatumbo. *Punto de Encuentro*, (82). <https://indepaz.org.co/transformacion-territorial-y-reconfiguracion-del-conflicto-retos-y-propuestas-para-el-catatumbo/>
- González Bustelo, M. (2001). *Desterrados. Desplazamiento forzado en Colombia*. Equipo Nizkor.
- Hayes-Conroy, A., y Sweet, E. L. (2014). Whose adequacy? (Re) imagining food security with displaced women in Medellín, Colombia. *Agriculture and Human Values*, 32, 373-384. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9546-y>

- Hernández Bello, A., y Gutiérrez M. L. (2008). Vulnerabilidad y exclusión: Condiciones de vida, situación de salud y acceso a servicios de salud de la población desplazada por la violencia asentada en Bogotá-Colombia, 2005. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 7(14), 145-176. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/2685>
- Human Rights Watch. (2016). *Informe Mundial 2016*. HRW. <https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/colombia>
- Ibáñez, A., Moya, A. y Velásquez, A. (2006). *Hacia una política proactiva para la población desplazada*. Editorial Universidad de los Andes.
- Illera, M. de J. (2022). Conflicto, derecho y mecanismos alternativos. *Ius et Praxis*, 28(1), 236-253. <https://doi.org/10.4067/S0718-00122022000100236>
- Instituto Nacional de Salud. (2017). *ONS. Consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia. Noveno Informe Técnico*. <https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/informe-9-consecuencias-conflicto-armado-salud-Colombia.pdf>
- Instituto Nacional de Salud. (2018). *Efectos del conflicto armado en la salud mental de las víctimas. Noveno informe técnico ONS*. [https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/publicaciones%20alternas%20boletin11\\_saludMental/Boletin11ONS.pdf](https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/publicaciones%20alternas%20boletin11_saludMental/Boletin11ONS.pdf)
- Jiménez, W. G. y González, J. I. (2014). Calidad de vida urbana: una propuesta para su evaluación. *Revista de Estudios Sociales*, (9), 159-175. <http://doi.org/10.7440/res49.2014.12>
- Malguesini, G. y Giménez, C. (2000). *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Los Libros de la Catarata.
- Machado-Duque, M. E., & Calderón-Flórez, V. (2014). Determinantes socioeconómicos, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en población desplazada de primera infancia, Pereira, Colombia. *Revista Médica de Risaralda*, 20(1), 3-8.
- Martínez, L. C., Moreno, A., y Molina, I. (2016). La calidad de vida en el territorio local: propuesta metodológica y práctica de campo. *Revista Prisma Social*, (17), 319-342. <https://revistaprismasocial.es/article/view/1287>
- Miguel, A. E., García, L. F., Santamaría, E. I., y Hernández, A. P. (2022). Bienestar urbano. El caso de las ciudades multiculturales de Oaxaca, México. *Revista Ciencias Sociales*, 176, 85-100. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/52744/53047>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). *Manual de Misión Médica*. MinSalud. <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Manual%20de%20Misi%C3%B3n%20M%C3%A9dica.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). *Estrategia de atención psicosocial en el marco del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas*. Autor.
- Mogollón Pérez, A. S., y Vázquez, M. L. (2006). Opinión de las mujeres desplazadas sobre la repercusión en su salud del desplazamiento forzado. *Gaceta Sanitaria*, 20(4), 260-265. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0213-91112006000400002#:~:text=Las%20mujeres%20desplazadas%20perciben%20alteraciones,a%20los%20servicios%20de%20salud](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112006000400002#:~:text=Las%20mujeres%20desplazadas%20perciben%20alteraciones,a%20los%20servicios%20de%20salud)
- Mogollón-Pérez, A. S., y Vázquez, M. L. (2008). Factores que inciden en el acceso de la población desplazada a las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia. *Cadernos de Saúde Pública*, 24(4), 745-754. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.015>
- Muggah, R. (2000). Through the developmentalist's looking glass: Conflict-induced displacement and involuntary resettlement in Colombia. *Journal of Refugee Studies*, 13(2), 133-164.
- Murad Rivera, R. (2003). *Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia*. CEPAL - Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a0c3181a-2847-4c1e-9e3a-6c18066f4db6/content>
- Navarro, M. (2024). Las interrelaciones entre las dimensiones y determinantes del bienestar. *Orchestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness*, 2024-R02. <https://doi.org/10.18543/RQFZ5110>
- Pedersen, D. (2002). Political violence, ethnic conflict, and contemporary wars: broad implications for health and social well-being. *Social Science & Medicine*, 55(2), 175-190.

- Pérez, L. F. (2021). *Reconstrucción del tejido social: experiencias de construcción de paz de las mujeres sobrevivientes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia y Guatemala* [Tesis de maestría]. Universidad Jorge Tadeo Lozano. <http://hdl.handle.net/20.500.12010/20099>
- Prada Gómez, G. E., Herrán Falla, O. F., & Ortiz Cárdenas, R. (2008). Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias desplazadas en el municipio de Girón, Santander, Colombia. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 23(4), 257-263. <http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49892008000400005>
- Procuraduría General de la Nación. (2024). *Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras". Undécimo informe de seguimiento al Congreso de la República 2023 – 2024*. <https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2024/Septiembre%202024/XI%20informe%20CSMLV.pdf>
- Progresar – Fundación para el Desarrollo Social, la Democracia y la Paz. (2000). *Mecanismos alternativos para la transformación de los conflictos*. Fundación Progresar.
- Registro Único de Víctimas. (s.f.). *Cifras generales del conflicto armado en Colombia*. RUV. <https://www.unidadvictimamas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/>
- Registro Único de Víctimas. (2025, 31 de enero). *Víctimas por hecho victimizante*. RUV. <https://cifras.unidadvictimamas.gov.co/Cifras/#!/hechos>
- Rincón, D. V., Reyes, J., Bobadilla, A. S., Ávila J. E. y Jaimes, V. (2024). La violencia en Colombia en el marco del posacuerdo la Paz Total (2016-2024). *Derecho y Realidad*, 22(44), 33-71. <https://doi.org/10.19053/uptc.16923936.v22.n44.2024.18890>
- Ruiz, N. Y. (2011). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 26(1), 141-177. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-72102011000100141&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102011000100141&lng=es&tlng=es)
- Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Sánchez Isaza, D. C., Cataño Ordóñez, N., y Ordóñez, N. C. (2016). Factores de riesgo total en familias migrantes en Soledad, Atlántico. *Revista Cuidarte*, 7(1), 1152. <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.174>
- Taborda, J. I. M. (1999). Historia y violencia en la Colombia contemporánea. *Memoria y Sociedad*, 3(6), 157-177.
- Ugalde, A., Richards, P., y Zwi, A. (1999). Health consequences of war and political violence. *Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict*, 2, 103-121.
- Vallejo Bravo, G. D. (2011). Calidad de vida en población desplazada por el conflicto interno en Colombia. *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM* [en línea]. <http://journals.openedition.org/alhim/3822>
- Vargas, N, B, I. (2021). Bienestar social, satisfacción de la vida y características personales de violencia. Vertientes. *Revista Especializada en Ciencias de la Salud*, 23(1-2), 22-30. [www.medigraphic.com/pdfs/vertientes/vre-2020/vre201-2c.pdf](http://www.medigraphic.com/pdfs/vertientes/vre-2020/vre201-2c.pdf)
- Villa, J. D. e Insuasty, A. (2016). Entre la participación y la resistencia: reconstrucción del tejido social desde abajo, más allá de la lógica de reparación estatal. *El Ágora U.S.B.*, 16(2), 453-478.
- Yáñez, R. y Albacete, M. (2020). *Indicadores territoriales de calidad de vida y bienestar subjetivo* [Documento de trabajo N° 266]. Rimisp.

## Notas

\*Artículo de investigación científica

## Origen de esta investigación

Esta investigación ha sido financiada en el marco del proyecto IN-HABIT (Salud y Bienestar Inclusivos en Pequeñas y Medianas Ciudades) como parte del Programa Horizonte 2020 (Acuerdo de Subvención N.º 869227). El contenido de este documento no refleja la opinión oficial de la Unión Europea. La responsabilidad de la información y las opiniones expresadas en el mismo recae exclusivamente en los autores.

Licencia Creative Commons CC BY 4.0

*Cómo citar:* Ayala García, E. T. y Pérez García, Y. (2025). Impacto del conflicto armado en el bienestar territorial y la calidad de vida en zonas de conflicto. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 18. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.icab>